

Omisiones de la Fiscalía impiden esclarecer caso Narvarte

proceso

DEA: CRIMEN
DESCONTROLADO



7 503029 193669

SEMANARIO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS No. 2405
4 DE DICIEMBRE DE 2022 • MÉXICO \$60.00 /USD \$4.80



DEBATES EN SAN LÁZARO

HASTA LOS ALIADOS
DE MORENA

FRENAN
LA REFORMA ELECTORAL

JERÓNIMO D. GALVÁN

El pasado 29 de noviembre Morena había anunciado con bombo y platillo que discutiría en el pleno de San Lázaro la reforma electoral, pese a no contar con mayoría calificada para modificar la Constitución. Pero decidió retrasar otros ocho días el asunto.

Y aunque la oposición, triunfalista, salió a decir que nuevamente habían detenido esta intentona contra el Instituto Nacional Electoral (INE), legisladores de la mayoría y sus aliados dejaron entrever que los desacuerdos internos impidieron discutir el dictamen debido.

Diputados de Morena mencionaron las diferencias internas en la bancada al reactivar una iniciativa enviada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en marzo pasado —conocida como Ley Elektra, porque beneficiaría al empresario Ricardo Salinas Pliego— que quería revivir la 'cobranza delegada' en esa "tienda de ra-

ya" moderna que se había congelado en el Senado y que permitiría retener directo del salario de los trabajadores los adeudos por créditos de nómina sin pagar.

El Partido del Trabajo (PT), a su vez, dejó entrever que, ante la llegada del Plan B de modificaciones a leyes secundarias en materia electoral, ellos también tienen una propuesta, y van por conservar a toda costa su registro como partido.

Ahora son los tiempos los que juegan contra el gobierno de la 4T para lograr una reforma electoral disminuida, pero probablemente más dura en cuanto a las reducciones financieras hacia el INE, que considera una compactación en las áreas administrativas.

En ese entendido y con la finalidad de no transgredir los plazos para modificar normas del sistema electoral y evitar encimarse con la elección de cuatro consejeros electorales, deberá resolverse el tema antes del 3 de abril del año próximo.

La oposición juega sus cartas y, después de la marcha del 13 de noviembre en defensa del instituto, una y otra vez saca

la bandera de la defensa del INE y su rechazo a cualquier intento por vulnerar los órganos de carácter electoral. Sin embargo, el PRI ha hecho un guiño a la posibilidad de tener un instituto más austero.

El PAN y el PRD han sido más firmes. Según sus legisladores, tienen preparada una estrategia contra esa iniciativa de reforma a seis leyes que enviaría la Secretaría de Gobernación antes del martes 6 de diciembre.

Las pugnas intestinas

La sesión del 29 de noviembre estaba programada en dos partes, según lo aprobado por la Junta de Coordinación Política: una, para dar publicidad al dictamen de la reforma electoral en materia de sistema electoral y, una vez realizado este trámite, levantar la sesión y abrir una nueva para debatir el dictamen elaborado con base a los lineamientos del presidente de la República.

Todo estaba listo, pero a las 8:32 de la mañana el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, anunció en sus redes que el dictamen se postergaba



San Lázaro, 29 de noviembre. Apuros legislativos

para el próximo martes 6. El propósito era tener mayor tiempo para interiorizarse en su contenido, en el análisis de la misma. "Por eso decidimos que valía la pena ser prudentes y dar oportunidad para que se pudiera discutir el dictamen en el pleno el próximo martes, miércoles", dijo a la prensa horas más tarde.

No tardaron los pronunciamientos de sus aliados del PVEM y el PT, quienes negaron que ellos hayan solicitado u obstaculizado el debate; expusieron que eso (el cambio de fecha del debate) serviría para evidenciar a la oposición en su rechazo a tener elecciones más austeras y menor gasto para los partidos.

"Hoy en la mañana Nacho Mier me había planteado, a petición de ellos, no a petición nuestra, que se pospusiera", dijo enfático el vicecoordinador petista Gerardo Fernández Noroña. El líder de la bancada ecologista, Carlos Puente, expuso poco después: "Que yo hubiera pedido, a cambio de ello una iniciativa, eso es falso... Yo no he pedido nada a cambio de transitar en ello".

Sin embargo, para esa hora se hablaba

Las divisiones entre los aliados de Morena en San Lázaro frenaron la discusión de la reforma electoral en el pleno, por lo que el coordinador de esa fracción, Ignacio Mier, tuvo que posponer el debate, en principio para el próximo martes 6. Sin embargo, el miércoles de la semana pasada declaró que su partido y aliados tienen hasta el 3 de abril de 2023 para resolver las leyes reglamentarias o secundarias que contempla el Plan B de la reforma.

en los corrillos de una "rebelión interna" en la fracción de Morena ante el ofrecimiento del coordinador morenista Ignacio Mier de aprobar en la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa de "cobranza delegada", que se aprobó el pasado 17 de marzo en el pleno de la Cámara Baja con el voto de la mayoría y sus aliados.

Al día siguiente de aquella votación, el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con vetar esa minuta enviada al Senado.

El 29 de noviembre, cuando se pretendía votar la reforma electoral, la Comisión de Hacienda fue llamada a sesión en la que se pretendía votar el documento promovido por el sector financiero, con especial interés para la llamada *telebancada*, de la que forma parte el coordinador del PVEM, Carlos Puente, quien fungió como jefe de Administración de Convenios Públicos en TV Azteca y ahora se relaciona con lo que en su momento se llamó la *Ley Elektra*.

Esta vez la iniciativa fue promovida por el legislador morenista Daniel Gutiérrez, pero de inmediato obtuvo el repudio de sus compañeros y tuvo que bajarse del orden del día de la sesión del 29 de noviembre, quienes dijeron no estar a favor: "No por Morena, sino por algunos diputados de Morena; o sea, el grupo parlamentario de Morena, casi en su gran mayoría, el día de ayer tomamos la decisión de que no era conveniente que se dictaminara hoy. (Pedimos) que mejor se excluyera del orden del día", explicó su compañero de bancada, Carol Altamirano.

Un factor adicional que ha marcado una línea divisoria en la bancada de Morena es el apoyo al senador Ricardo Monreal, al menos por parte de los 50 diputados que firmaron la carta promovida por Alejandro Rojas Díaz Durán, sustituto del zacatecano, frente a la descalificaciones a su persona desde el *Martes del Jaguar*, espacio donde la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha revelado diversos audios de llamadas privadas entre personajes de la clase política, como el líder del PRI, Alejandro Moreno, y el empresario Claudio X. González.

Ponen condiciones

Un tuit del coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, prendió los focos rojos: "¿Se acuerdan de las tienditas de raya de Morena?... En estos momentos está reviviendo en Comisión de Hacienda a cambio de apoyar la reforma electoral", publicó el legislador.

El coordinador del PVEM en San Lázaro, de inmediato desmintió esa aseveración: "Que yo hubiera pedido, a cambio de ello una iniciativa, eso es falso... Yo no he pedido nada a cambio de transitar en ello".

En cambio, el diputado Puente Salas habló de llevar hasta el año próximo las negociaciones del Plan B para reformar seis leyes secundarias relacionadas con el sistema electoral mexicano: "Tenemos que revisar el modelo. En eso, todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios han coincidido conmigo. Yo espero que de aquí a febrero podamos ir construyendo lo que sí va a ir pasando; aquellos ajustes a la legislación que permitan poder tener un proyecto electoral más claro, más justo", indicó en conferencia de prensa.

En los pasillos del recinto legislativo también sonaba el desacuerdo de legisladores del PT por planteamientos de la reforma constitucional que pondrían en riesgo su permanencia como partido y la elección de senadores y diputados de este partido.

Tocó turno entonces al grupo parlamentario del PT de hacer sus precisiones: "Hay una serie de rumores que, francamente, no sabemos de dónde salen. Porque nosotros, el Partido del Trabajo, determinó votar a favor de la reforma constitucional en materia electoral; no es una discusión técnica, es una discusión política", dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña.

Lo que sí reconocieron los petistas es que ese mismo día inscribieron en la *Gaceta Parlamentaria* su propuesta de modificaciones a Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la de Partidos Políticos, misma que en su exposición de motivos habla de la paridad de género en los comicios, pero que en el contenido

CONGRESO

do se concentra en insertar el concepto de "votación total emitida" para conservar el registro de un instituto político y revive la "candidatura común", para un mismo logo de la boleta a los partidos que impulsen a un candidato.

Negaron a los medios de comunicación que fuera una moneda de cambio para ir con Morena en las normas secundarias. "El debate es ideológico y político, y son dos propuestas que se dibujan con toda claridad. Y nosotros estamos en la propuesta de la 4T, que emergió el 1 de julio de 2018, en el Ejecutivo y en el Legislativo", dijo Reginaldo Sandoval.

"Somos 500 diputadas y diputados, hay que dar oportunidad a que todo se socialice, nada nos quita. ¡Quitense de sospechosismo!, diría el clásico", dijo Ignacio Mier para salir de la polémica sobre los diferendos que llevaron a retrasar la reforma electoral y el Plan B instruido desde el Ejecutivo federal.

Una foto de los tres coordinadores en redes sociales con la leyenda "Los grillos de siempre nos quieren dividir. Ahí les dejo esta foto de la coalición para que le arda más a la oposición", pareció cerrar el asunto.

Corre el tiempo

El 30 de noviembre, al calor de los dimes y diretes por el retraso en la dictaminación del documento aprobado dos días antes por las Comisiones Unidas de Reforma Político Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población, una declaración del coordinador de los diputados de Morena irrumpió en los portales de medios de comunicación y en las redes sociales.

"Hasta el 3 de abril (de 2023) tenemos tiempo", dijo el legislador poblano y

próximo aspirante a gobernador, en torno al límite para resolver las leyes reglamentarias o secundarias que contempla el Plan B de la reforma electoral. Es decir, conforme a la ley, al menos tres meses antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, y previo al inicio del proceso de selección de cuatro consejeros electorales del INE, ante la salida del presidente del órgano autónomo, Lorenzo Córdova, y uno de los principales detractores de las decisiones de la actual administración federal, Ciro Murayama.

En algunos portales informativos infirieron que esta declaración decía que la discusión se aplazaba hasta abril de 2023, pero el diputado Mier Velazco acudió personalmente a la sala de prensa el 30 de noviembre para esclarecer: "Vamos a esperar que lo tengamos (el Plan B) con oportunidad... No nos vamos a esperar al día 3 de abril, la vamos a concluir en la Cámara de Diputados, a más tardar, en este periodo ordinario, pero más cercano, la próxima semana, para que ya el Senado, en respeto a su soberanía, determine su proceso.

En medio de las gestiones con el PT y el Partido Verde, el diputado Mier argumentó: "La columna vertebral, respetando los márgenes que establece la Constitución, se referirán a las seis leyes secundarias en materia de reforma político electoral, o vinculadas a las cuestiones electorales, que va incluida desde la ley de comunicación social hasta la ley de partidos políticos".

Según la mayoría de Morena y sus aliados, todo está listo para que, antes del sábado 10, quede lista la reforma electoral a leyes secundarias y éstas puedan aplicar al proceso electoral de 2024, cuando se decidirá, además, quién conducirá el país los próximos seis años.

Como dijo el coordinador del PVEM, Carlos Punte: "Vamos a construir al interior de la coalición, vamos a construir la iniciativa. En consecuencia, vamos a construir con Morena, con el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y construir un dictamen de lo posible. Claro que hay que sacar la secundaria, como lo hicimos en la eléctrica, con el litio".

El guiño del PRI

Sin conocer las leyes secundarias, la alianza de Va Por México -PRI, PAN y PRD- ha anticipado que va por recursos legales ante cualquier cambio que se contraponga al artículo 41 de la Constitución mexicana, como señaló el panista Santiago Creel.

En conferencia de prensa, el presidente de la Mesa Directiva advirtió a la mayoría que preparaban acciones de inconstitucionalidad y otros recursos legales ante cambios que atenten contra lo que establece el artículo 41 constitucional, respecto al sistema electoral y de partidos, o cualquier otro vinculado al tema.

Incluso, dijo Creel, irían por la defensa de los derechos ciudadanos de nueva generación: "Entonces, si quieren jugar con la democracia del país, pues se van a topar con los recursos porque, además, los amparos pueden ser colectivos. Se puede hacer una marcha para firmar los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JDC)".

Pero el PRI, pese a retomar la alianza legislativa con el PRD y el PAN, ha abierto la puerta a cambios que pudieran ir, vía leyes secundarias, a detener el gasto en el órgano autónomo.

Con todo y el rechazo a cualquier reforma de carácter constitucional que afecte al INE, ha dejado en claro que el instituto que encabeza Lorenzo Córdova tiene que reducir sus costos: "Nosotros votamos por nuestras razones, y no es un cheque en blanco al INE, ¿eh? Nosotros, del INE, esperamos austeridad; esperamos menos estridencia; esperamos que se legitimen con su trabajo. Nosotros votamos por lo que ya le dije, que eso es lo válido".

En medio de la nueva postura infranqueable del tricolor, que se fortaleció tras la marcha del pasado 13 de noviembre "en defensa" del órgano rector de las elecciones, el jueves 1 el líder de Morena en San Lázaro informó la continuación del proceso de juicio de desafuero contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; "la declaración de procedencia o desafuero como lo conoce la gente, es en realidad un proceso con características jurisdiccionales que tiene tiempos; y uno de los tiempos de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre las integrantes y los integrantes de la Sección Instructora deberán solicitar pasar a la siguiente etapa".



Fernández Noroña. "Es una discusión política"

COLIMENSES LA REPRUEBAN

GOBERNADORA INDIRA VIZCAÍNO, LA GRAN DECEPCIÓN



Vizcaíno. Primer informe

PEDRO ZAMORA BRISEÑO

COLIMA, COL.- Bajo el cobijo presidencial pero ubicada en uno de los peores niveles de aprobación ciudadana, la gobernadora morenista Indira Vizcaíno Silva cumplió su primer año en el cargo, al que llegó en 2021 luego de poner fin a nueve décadas de hegemonía del PRI en esta entidad.

"Estamos muy contentos con el trabajo de Indira y yo creo que la gente de Colima respalda su gobierno", dijo el 23 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina realizada en Manzanillo, adonde acudió a conmemorar el Día de la Armada de México.

No obstante, las mediciones de las principales encuestadoras sobre el desempeño gubernamental contradicen al jefe del Ejecutivo federal, pues en este campo se encuentra relegada al sótano del *ranking* de gobernadores.

Según consulta Mitofsky, al inicio de su administración, en noviembre del año pasado, Indira Vizcaíno ocupaba el lugar 27 de la lista de 32 gobernantes estatales, con 44.1% de apoyo, pero en octubre pasado, en lugar de mejorar su posición, descendió

Un año bastó para que la gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno, cayera al mínimo de la aprobación ciudadana, pese a que terminó con la hegemonía del PRI en 2021 y cuenta con el apoyo reiterado e incondicional de López Obrador. Los escándalos en su administración, la crisis financiera, el repunte de la delincuencia organizada y sus maniobras para aumentar su poder y su sueldo han contribuido a la percepción de que su gestión es peor que la de sus antecesores.

hasta el sitio 31, con 36.5% de aprobación.

Los resultados reportados en octubre por C&E Research colocaron a Vizcaíno en el nivel 30, con 45.5% de aprobación, en tanto que la encuestadora Rubrum la ubicó en el sitio 28, con 3.63 de calificación, de un máximo de 9.

En cada una de las cuatro visitas que López Obrador ha realizado a Colima en el primer año del gobierno de Vizcaíno, le ha reiterado públicamente: "No estás sola".

Y en la más reciente, en el contexto de la ola de violencia que vive el estado, el presidente reveló incluso que la gobernadora

"fue amenazada y resistió; y aquí está protegida por nosotros y por el pueblo, y no se escondió; es una mujer con cabeza, corazón y carácter, tiene las tres C que se requieren para estos menesteres. Y la vamos a seguir apoyando, ayudando en todo".

Además del desbordamiento de la inseguridad y la violencia como uno de los sucesos de mayor impacto durante su mandato, Vizcaíno ha sido criticada por su pretendida concentración del poder, por la selección de integrantes de su gabinete y sus frecuentes viajes para apoyar campañas políticas de su partido.

A lo anterior se suma que en agosto el dirigente del sindicato de burócratas, Martín Flores Castañeda, denunció públicamente que cuatro meses antes la mandataria se había elevado en secreto su sueldo 36.5%, junto con 24 integrantes de su gabinete, que tuvieron aumentos de entre 25 y 60%.

Ante el escándalo, Vizcaíno se vio obligada a dar marcha atrás en la decisión e inclusive dijo que devolvería al erario el exceso cobrado. Poco después anunció un aumento salarial de 8% a los policías estatales.

El politólogo Abel Palomera Meza señala que en su primer año Vizcaíno "no logró consolidar el gobierno esperado ni generar un cambio que represente una diferencia tajante en relación con las administraciones anteriores, lo que provocó una gran decepción entre quienes tenían la esperanza de un cambio verdadero, como dicen los morenistas".

Consultor en materia de políticas públicas y miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, Palomera Meza considera que el bajo nivel de aprobación para la mandataria tiene su explicación en que "no cumplió lo que vendió en campaña y, como no hubo cambio, la gente se quedó esperando y se sintió traicionada".

Para el catedrático universitario y abogado Rumualdo García Mejía, el gobierno de Vizcaíno "ha sido un desastre; es exactamente lo mismo que había con los gobernadores priistas, con la diferencia de que ella no solamente ha sido incapaz de mejorar nuestra calidad de vida, la ha empeorado".

Entre los principales errores que a su juicio ha cometido la mandataria, García Mejía expone: "Rodearse de perfiles incompetentes, que ni idea tienen de las funciones que les corresponde desempeñar; reciclar políticos de otros partidos con señalamientos de corrupción; su falta de sensibilidad y de empatía con familiares de víctimas de homicidios y desapariciones forzadas, así como la omisión de llamar a cuentas a exgobernadores y funcionarios que han cometido delitos y faltas graves en perjuicio de la sociedad".

A lo largo de su gobierno, añade García Mejía, la mandataria ha tratado de asumir el control absoluto del poder y "en cierta medida le ha funcionado, porque la mayoría de instituciones, inclusive las encabezadas por la oposición, han sido avasalladas, salvo el Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia, el Sindicato de Gobierno y el caso especial de la también morenista alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, quien ha decidido no someterse".

Violencia, niveles históricos

A finales de enero de este año, en el tercer mes de gobierno de Indira Vizcaíno, fueron

asesinados nueve presos en el Centro de Reinserción Social de esta capital, lo que fue atribuido por las autoridades a una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación. El crimen detonó enfrentamientos entre esta organización y el cártel local Los Mezcales.

Meses después Colima vive niveles históricos de asesinatos y desaparición de personas, con las más altas cifras desde que se tiene registro público en el último cuarto de siglo. Y aumentaron las balaceras, las ejecuciones, la aparición de cuerpos embolsados o restos humanos en lugares públicos, la quema de automóviles y de viviendas, los ataques a negocios.

También creció notablemente en la población el miedo por la inseguridad y la violencia en la capital del estado, pues mientras en diciembre de 2021 se sentían inseguros 66.5% de sus habitantes, en junio de 2022 el porcentaje se elevó a 87.5, lo que ubicó a Colima entre las cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A contrapelo de la tendencia nacional, que en los primeros 10 meses de 2022 reportó una reducción de 7.1% de homicidios en México —frente al mismo periodo de 2021—, en Colima se incrementó 68.2% la incidencia de este delito durante ese lapso, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta situación llevó al estado a recuperar el primer lugar nacional, que ya había ocupado de 2016 a 2019, en la tasa de asesinatos, que de enero a octubre de este año fue de 91.83 víctimas por cada 100 mil habitantes, en tanto que la tasa promedio nacional fue de 20.07. En homicidios dolosos

de mujeres y en feminicidios también ocupa Colima los primeros lugares.

Además, 2022 ya es el año con el mayor número de desapariciones de personas, con 645 denuncias, 419 de las cuales corresponden a víctimas no localizadas. El máximo histórico correspondía a 2017, con 579 expedientes abiertos.

Confrontación

Al acudir al Congreso del estado para entregar su Primer Informe, el 23 de noviembre, la gobernadora argumentó que "ha sido un año muy difícil, muy retador; la casa estaba mucho más sucia y endeble de lo que anticipábamos, pero claramente hemos sentado las bases de un proyecto de transformación".

Responsabilizó a la administración anterior, encabezada por el priista José Ignacio Peralta Sánchez, de haberle entregado el estado en medio de un desastre financiero, que en su último año la hizo gastar en seis meses el presupuesto de 12 y dejar de pagar el salario de los trabajadores.

"A las dificultades financieras —explicó— hay que agregar los nuevos retos que han surgido en materia de seguridad: si en el último par de décadas la contemplación, en el mejor de los casos, o la complicidad en el peor, habían ocasionado que las bandas delictivas operaran a sus anchas en Colima, en enero de 2022 el rompimiento al interior de un grupo criminal hegemónico en el estado ocasionó el recrudecimiento de la violencia que todos conocemos."

La mandataria indicó que la tranquilidad de las familias colimenses es el principal reto de su gobierno. "No claudicaremos en este empeño; sabemos que más temprano que tarde, con el esfuerzo de todas y todos, recuperaremos la tranquilidad para nuestra Colima".

Desde la tribuna legislativa, el coordinador de la fracción del PAN, Crispín Guerra Cárdenas, le dijo a la mandataria que un año fue suficiente para que el pueblo se sienta desilusionado, "y así lo marcan todas las encuestas que la colocan cada mes como una de las gobernantes peor calificadas".

A su vez, el coordinador de la fracción priista, Héctor Magaña Lara, cuestionó las cifras en materia de violencia, así como los resultados en el rubro de salud, cuya situación "sigue igual o peor en abasto de medicamentos e insumos", y consideró contradictorio presumir que por las medidas de austeridad se ahorraron 500 millones de pesos pero a la vez se dejaron de pagar más de 200 millones al fondo de pensiones del gobierno estatal.

En respuesta, Vizcaíno se lanzó contra los diputados de oposición, de quienes dijo: "Son muy ruidosos, muy maquiavélicos, pero también muy poquitos".

Abundó: "Me sorprende la facilidad con la que mienten; a esa oposición política le



Flores. Burócratas en conflicto



Foto: @ColimaCDH

Ramírez. Quejas contra fuerzas federales

digo: la gente ya les dijo 'no más', y se lo repetirá una y otra vez; la gente ya los probó, ya los juzgó y ya los desechó".

Inseguridad

Aunque considera positivo que el presidente respalde a los gobernadores, Abel Palomera comenta que en el caso de Colima el gobierno federal ha tenido que intervenir en la mayor parte de los problemas del último año, sobre todo en materia de seguridad, de finanzas, en el conflicto con el sindicato de burócratas, en el caso de ahorradores defraudados por una financiera y en el de decenas de familias desalojadas de la comunidad de Campos, Manzanillo.

Afirma: "Cada que vienen el presidente o el secretario de Gobernación les toca apagar fuegos; Colima se ha manejado en este primer año como una especie de protectorado de la federación, como un territorio sin soberanía en las funciones principales que un gobierno estatal tendría que cumplir".

En cambio, prosigue el politólogo, Vizcaíno no ha sido una gobernadora de tiempo completo, pues ha puesto más atención al aspecto electoral, "a querer quedar bien con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, probable candidata de Morena a la Presidencia de la República, y a apoyar candidaturas de su partido en otras entidades".

Entre los aspectos que más han afectado la imagen de la gobernadora, dice Palomera, están la inseguridad y la violencia, porque "prometió que habría paz, pero no sólo no se ha reducido el problema, sino que ha crecido".

A pesar de que este año el gobierno federal ha enviado a Colima más de 3 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, la militarización no ha contribuido a inhibir los asesinatos ni las desapariciones, como lo muestran las cifras oficiales.

En cambio, aumentaron las quejas por abusos atribuidos a las fuerzas federales, como señala Roberto Ramírez, presidente

de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima.

El titular del organismo autónomo dice en entrevista que del año pasado al actual crecieron de siete a 18 las quejas contra personal de la Secretaría de Marina, de siete a nueve contra la Guardia Nacional y de cero a tres contra efectivos del Ejército, lo que "tiene que ver con el hecho de que se han involucrado en temas de seguridad urbana, como el patrullaje y abordaje de delitos comunes".

Las conductas que se atribuyen a los miembros de corporaciones federales tienen que ver con "excesos al momento de la detención y violar el principio de legalidad o el debido proceso", refiere Roberto Ramírez.

En las condiciones actuales, dice, en Colima existe una vulneración del derecho a la seguridad pública, por lo que considera necesario reforzar la estrategia de seguridad volteando a ver las condiciones laborales, de capacitación y equipamiento con las que trabajan los policías.

Ramírez propone reactivar el Consejo Ciudadano de Seguridad, que en 2022 no ha sido llamado a emitir su opinión en las mesas de esa materia. "Estoy seguro de que, en la medida en que la sociedad pueda irse integrando en esas tareas, los resultados serán más favorables", comenta.

Aunque la gobernadora no ocultó su respaldo y entusiasmo ante la consulta sobre revocación de mandato de López Obrador, a tal grado que fue sancionada por los organismos electorales, ahora el Congreso del estado -bajo control de la mandataria- pretende evitar que sea sometida a un ejercicio de esa naturaleza.

En la ley reglamentaria aprobada hace meses se estableció que la consulta podrá aplicarse a quien encabece el Ejecutivo local a partir del sexenio 2027-2033, pese a que esa figura estaba desde 2019 en la Constitución estatal.

Actualmente, la Suprema Corte analiza una acción de inconstitucionalidad promovida por nueve diputados locales contra esa disposición legal aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados.

Rumualdo García, quien desde mayo pasado empujó y logró la aprobación de la ley secundaria mediante un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado, considera "una incongruencia total" que Vizcaíno pretenda evadir la consulta de revocación de mandato para que la población califique los resultados de su gobierno.

Expone: "No le veo sentido a que la gobernadora quiera omitir este ejercicio tratándose de su gestión, o quizá vea que es muy mala, pésima, y por eso mismo tenga una especie de temor a que la evaluación no le sea favorable y pueda ser la primera gobernante a la que en México se le revoque su mandato, precisamente por los malos resultados". ●



Foto: Google maps

Cereso de Colima. Violencia

Sus numerosas y costosas campañas de imagen en los medios y en las redes sociales, así como los elogios del presidente, no lograron cambiar la imagen que tienen del ya exgobernador priista Alejandro Murat muchos oaxaqueños. Los partidos opositores le reclaman hechos de presunta corrupción, un enorme gasto en obras no entregadas o concluidas y notorias omisiones frente a la violencia en el estado, tanto la de la delincuencia organizada como la ejercida contra mujeres y niñas.

PEDRO MATÍAS

OAXACA, OAX.- Alejandro Murat Hinojosa concluyó su sexenio como lo inició: con movilizaciones y protestas en su contra que lo obligaron a rendir protesta el primer día en una sede alterna al Congreso y le impidieron entregar en este mismo recinto su último informe.

El "Modelo Oaxaca" o el "milagro oaxaqueño" que pregonó fue un fracaso que, además, dejó la estafeta del priismo en manos de un gobierno de Morena. ▶

Marcha contra Murat

TERMINA

EL DESASTROSO GOBIERNO DE ALEJANDRO MURAT



Analistas, defensoras de derechos humanos, activistas y legisladores describen a **Proceso** el estilo de gobierno de Murat, fabricado "desde los medios de comunicación, desde el Tik Tok; fue una estrategia mercadológica. Fue un gobierno de mentiras y engaños; logró engañar al propio presidente, Andrés Manuel López Obrador".

Sustentan esta descripción cifras como los 4 mil 543 homicidios dolosos hasta septiembre de 2022; 715 feminicidios; el asesinato de 49 personas defensoras del territorio, el medio ambiente y los derechos indígenas, así como el desplazamiento forzado de miles de personas, derivado de conflictos internos.

Además Oaxaca vive con una crisis de desaparición de personas, con más de 3 mil casos, entre éstos los de mil 984 mujeres.

Organizaciones civiles y medios de comunicación han documentado por lo menos 10 masacres por conflictos agrarios, políticos o intercomunitarios que dejaron más de 60 muertos. Una de ellas ocurrió en junio de 2020 en Huazantlán del Río, donde 15 indígenas ikoots fueron lapidados y calcinados.

Aunado a ello, la Fiscalía General de Oaxaca reconoce que sólo entre el año pasado y el actual se iniciaron 16 carpetas

de investigación por los delitos de desaparición forzada cometidos por autoridades, con un total de 19 víctimas, entre las que se encuentran la defensora del bosque Irma Galindo Barrios y la defensora británico-mexicana Claudia Uruchurtu Cruz.

Murat sale del Palacio de Gobierno sin acatar recomendaciones, peticiones de acciones urgentes y medidas cautelares por algunos de los casos mencionados, que le fueron presentadas por organismos internacionales, como la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una de estas solicitudes fue hecha por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (de la Organización Mundial contra la Tortura) por amenazas a la organización Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca y contra la periodista Soledad Jarquín, madre de María del Sol Cruz Jarquín, periodista asesinada el 2 de junio de 2018.

El ahora exgobernador también se cruzó de brazos ante la operación de una red integrada por notarios públicos y funcionarios estatales y federales señalados

como el "cártel del despojo" y que mediante alteraciones de documentos oficiales presuntamente arrebataron propiedades a numerosas personas, acusaciones que fueron formalizadas en 213 carpetas de investigación que contienen señalamientos por presuntos asesinatos (**Proceso** 2381).

Murat deja a la entidad una deuda de 20 mil 629 millones de pesos, superior a la que recibió de sus antecesores, ya que en 2004 la gestión de su papá, José Murat Casab, dejó una deuda de 486 millones de pesos; en 2010, con Ulises Ruiz Ortiz, creció a 5 mil 807 millones de pesos; y en 2018 Gabino Cué Monteagudo la elevó a 14 mil 711 millones de pesos.

Respecto a la deuda que diputados de Morena le autorizaron el 3 de octubre de 2019 por 3 mil 410 millones de pesos, que justificó con 118 proyectos en obras sociales —de los cuales 11 calificó de estratégicos—, no entregó ninguna obra emblemática y otras las inauguró sin terminar. Entre ellas están el libramiento sur de Oaxaca, para el que pidió 300 millones pero no concretó.

Un sexenio marcado

De madrugada y en una sede alterna al Congreso (un estudio de la Corporación

El exgobernador. Aspiraciones



Montserrat Lopez

Oaxaqueña de Radio y Televisión), Murat Hinojosa rindió protesta como gobernador el 1 de diciembre de 2016, luego de que maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sitiaron el recinto legislativo más de 15 horas.

Seis años después, Murat tampoco pudo rendir su sexto informe de gobierno en el mismo recinto; organizaciones sociales bloquearon el Congreso durante tres días.

Murat rindió su último informe en una sede alterna, donde afirmó que su administración solventó "pendientes financieros" por 11 mil 400 millones de pesos que atribuyó a herencias del anterior gobierno estatal. "Las finanzas del gobierno hoy se entregarán sólidas y fuertes para muchos gobiernos más", dijo.

Según él, a pesar de los fenómenos naturales y la pandemia, Oaxaca creció al 6.8% en los indicadores económicos y fue el estado donde más disminuyó la pobreza, para lo que citó datos del Coneval. Añadió que la entidad se ubica como la octava más segura del país y presumió que cuenta con paz y gobernabilidad, "pues se ha privilegiado el diálogo para construir acuerdos".

Sin embargo, la legisladora de Morena Liz Arroyo Rodríguez afirma: "A seis años de gobierno vemos que la administración saliente deja una huella de nepotismo, amiguismos y de corrupción, que han sido la constante durante estos años, siendo ejemplo de ineptitud, incapacidad, falta de solvencia política y ética".

La diputada recuerda que algunas dependencias no ejercieron los recursos destinados para los oaxaqueños en tiempo y forma, como fue el caso de los 150 millones de pesos para la reactivación económica tras la pandemia de covid-19, que la Secretaría de Bienestar no ejerció y cuyo destino se desconoce hasta la fecha.

El Sector Salud en Oaxaca se encuentra en riesgo del colapso, con una deuda superior a los 9 mil millones de pesos, además de que enfrenta pasivos por demandas laborales y multas por evasión fiscal ante la Secretaría de Finanzas; "el desabasto de medicamentos y el proceso de federalización siguen estancados", agrega Arroyo.

"En propia voz del gobernador, reconoció que los Servicios de Salud de Oaxaca enfrentan un déficit anual de mil 700 millones de pesos", pero este año se destinaron a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería 262 millones 721 mil 257.47 pesos, en tanto que al Hospital de la Niñez Oaxaqueña se le otorgaron menos de 48 millones de pesos, afirma la legisladora de Morena.

A su vez, el maestro en sociología e investigador de la Universidad Autónoma

Facebook/Liz Arroyo



Arroyo. Crítica

Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Isidoro Yescas Martínez, señala: Murat "nos ofreció que al término de su sexenio se hablaría de un milagro y lo que estamos viendo es un desastre en lo social, en lo educativo, en materia de seguridad, de bienestar social y en materia de combate a la corrupción".

El sociólogo define la administración saliente como "de simulación y engaño": "En comunicación social construyó a nivel nacional una imagen de buen gobernante entre comillas, de un político eficaz, que le está permitiendo aspirar en el PRI como precandidato a la Presidencia de la República".

Además, Murat se quiere atribuir la obra del corredor interoceánico, que es impulsada por el gobierno de López Obrador, quien elogió profusamente al entonces gobernador.

"El de Murat es un gobierno desastroso, no se merece ningún homenaje, hay una mala lectura, mala apreciación de López

Obrador; para los oaxaqueños no fue un buen gobernante, ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido Oaxaca, y estamos hablando de gobiernos priistas", enfatiza Yescas.

El especialista en planeación y administración educativas e investigador de la UABJO Samuel Hernández Ruíz ironiza: "Su gobierno, si se le puede llamar así, fue la expresión de una dinastía que opera en Oaxaca, la dinastía Murat, porque su papá hizo los arreglos para que su hijo gobernara y lo logró. De entrada, eso ya es grave, el señor ni siquiera es de Oaxaca, después vino el asunto (de) que no conocía el estado".

El experto explica que en materia económica Oaxaca "tiene una inercia y se mantiene en esa inercia. Los oaxaqueños sobreviven gracias a Dios, porque si fuera por sus gobiernos, nomás no. Y también por las remesas. Toda la economía de autoconsumo que tienen los municipios de usos y costumbres viven porque ▶

PEDRO MATÍAS

OAXACA, OAX.- Apenas unas horas después de que el priista Alejandro Murat Hinojosa le entregó el bastón de mando a su sucesor de Morena Salomón Jara Cruz en el Palacio de Gobierno, se rompió el encanto de una tersa transición, por la cual el primero había recibido los elogios del presidente López Obrador.

La cercanía entre el ahora exgobernador y el presidente, a cuyo partido Murat prácticamente le entregó la entidad desde hace cuatro años —lo que le valió que el priista exigiera su expulsión por traición— pareció enfriarse en unos días.

El sucesor, Jara Cruz, apenas rindió protesta arremetió en su contra: “Hoy puedo informar que la ineptitud, la soberbia, la prepotencia, la mentira y la simulación fueron el sello de la administración saliente”.

El 30 de noviembre Jara recibió el bastón de mando como parte de una ceremonia tradicional. El jueves 1 acudió al Congreso del estado para la investidura oficial. Después de esto, en el auditorio Guelaguetza realizó un acto masivo en el que soltó todo contra Murat Hinojosa.

Dijo, por ejemplo, haber recibido obras que en realidad son “hermosos cascarones que muestran de cuerpo entero un legado de proyectos inconclusos, sobrevaluados y mal hechos”.

Además, afirmó, “en materia de deuda pública, Ulises Ruiz le heredó a Gabino Cué 6 mil millones; por su parte, Gabino incrementó la deuda hasta 15 mil 594 millones; y ahora estamos conociendo que la deuda pública se ha incrementado a más de 20 mil 600 millones; y por si eso no fuera poco, los servicios financieros, es decir, el costo de la deuda, es uno de los más caros de todo el país”.



Murat y Jara. Confrontación

EL FIN DE LA “TERSA TRANSICIÓN”

Respecto de “la deuda adquirida a través del decreto 809 (por 3 mil 500 millones de pesos), supuestamente para financiar diversas obras de infraestructura, se ha manipulado la información con la intención de ocultar obras de infraestructura deficientes, inconclusas o que constituyen grandes elefantes blancos”, tronó Jara.

El morenista continuó con la andanada y se dijo obligado a mencionar algunos de los “fracasos más emblemáticos” en materia de obra pública para la cual se contrató la deuda, entre los que citó el Centro de Convenciones de Huatulco (320 millones), la Casa de Alas del DIF (160 millones) y el Centro Cultural Álvaro Carrillo (527 millones).

Este último fue recientemente inaugurado por Murat con apenas 60% del avance físico; es decir, inconcluso.

Jara denunció que Murat le heredó un incremento de plazas basificadas que representa un incremento del gasto del gobierno cercano a 37%. “Esto no lo voy a aceptar. Quisieron pasarse de listos dos políticos del PRI; vendieron plazas de a 100 mil, 150 mil y hasta 200 mil pesos”, aseguró.

Aunque se negó a nombrar a los funcionarios involucrados, advirtió que la fiscalía debe investigar el asunto. “Para aquellos que madrugan o que se quieren pasar de lanza, siempre hay un pueblo atento. No toleraremos más corrupción”, fue el ríspido mensaje que dirigió al pueblo oaxaqueño en las primeras horas de su sexenio.

Murat, por su parte, sigue esperando el homenaje que públicamente prometió hacerle López Obrador, quien todavía el 21 de noviembre, durante la ceremonia en homenaje a Ricardo Flores Magón en Palacio Nacional



Galindo. Desaparición

tienen una tradición comunitaria para la sobrevivencia.

Y acusa: en Oaxaca hubo un saqueo del erario “a la vista de todos y con la aprobación de Morena y el discurso protector del presidente”.

La abogada feminista y de la dirección colectiva de Consorcio para el Diálogo Parlamentario Yésica Sánchez Maya coincide:

“No podemos tener en certeza nada concluido, ni la carretera a la costa ni al Istmo ni una política de estado en ninguna materia, pero sí tenemos mucho saqueo, violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Se quedó corta la implementación (de la ley para eliminar) productos chatarra de las escuelas; el acceso al aborto, el tema de los servicios de salud, el mal manejo de la pandemia”...

La representante de consorcio señala al exgobernador por incurrir en un

y flanqueado por el priista y su sucesor, Salomón Jara, celebró "que se esté llevando a cabo esta transición en armonía, como lo merece el pueblo de Oaxaca".

Aunque para Murat no habrá cargo federal, como los que el presidente ha concedido a otros gobernadores priistas en entidades actualmente gobernadas por Morena, como Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, y Claudia Pavlovich, de Sonora.

Sin embargo, Murat Hinojosa sigue obstinado en ser candidato del PRI a la Presidencia de la República, por lo cual anunció que iniciaría una gira por el país a partir de este sábado 3.

Según las propias cifras de su gobierno, durante su mandato Murat destinó más de mil 300 millones de pesos en promoción de su nombre, imagen y aspiraciones en medios nacionales, la colocación de espectaculares en diferentes entidades y en pagar portadas de revistas.

En septiembre de 2020 apareció en una edición especial de la revista *Forbes México*, para promover su nuevo modelo de gobierno, "Crear, construir, crecer", donde presumió proyectos de la administración federal.

Con Murat en la portada y 64 páginas dedicadas a promover sus acciones de gobierno, la revista inauguró la primera edición especial *Forbes México Report*, dedicada a Oaxaca.

En julio de 2022 Murat y su esposa, Ivette Morán, aparecieron en la portada de la revista *Quién*, donde declaró: "Por supuesto que quiero ser presidente, si tengo el empaque y tengo la capacidad para decir que soy la mejor alternativa para México".

Murat y su esposa fueron reprendidos por el congreso local por usar el patrimonio cultural de Oaxaca en la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week, donde además Ivette Morán presentó una colección de su propia marca, Moravy. La pasarela se reali-

zó del 17 al 20 de agosto en esta capital.

Desde la tribuna, la diputada de Morena Yesenia Nolasco Ramírez cuestionó al actual gobernador por "gastarse el dinero en publicitarse" y dejar endeudado al estado hasta 2044.

En entrevista, el activista Elliot Escobar habló sobre las aspiraciones declaradas por Murat: "Con su modelo, Oaxaca la tiene muy complicada al interior del PRI, porque la fracción dominante es la de Alejandro Moreno y ese bloque opositor siempre ha dicho que Murat es el gobernador priista más morenista que hay en México, junto con su papá y los pactos que hicieron".

Escobar dijo creer que mientras sirva a los intereses de la 4T, ésta "va a dejar pasar el cochinerito que dejó en Oaxaca y van a voltear la cara hacia otro lado para que las cosas ocurran; él es una carta fuerte de la 4T".

A su vez, el ex candidato presidencial del PRI Roberto Madrazo postuló el 4 de noviembre en su cuenta de Twitter: "Primero @alejandromurat se destapa para buscar la presidencia con el #PRI y después dice que es una buena idea la reforma electoral... Más que candidato de #oposición parece el candidato de AMLO para que fracase la oposición...".

En la víspera del cambio de gobierno, el martes 29, el exgobernador Ulises Ruiz también publicó en sus redes fustigando a Murat: "Ah que mis amigos del PRI Oaxaca, se rasgan las vestiduras por renunciar al tricolor y reclaman a la diputada y a su padre, cuando el culpable de la debacle es Alejandro Murat. Mandó a Bolaños, Estefan y Gurrion al verde, impuso candidaturas y se entregó a AMLO para salvarse.

"Ante la escandalosa corrupción de su familia, perdió prácticamente todos los cargos de elección popular en su gobierno y traicionó al PRI entregando la plaza a AMLO

y todavía le gritan los enojados priistas presidente... de risa. Exijanle a él y expúlsenlo de sus manguadas filas", remató Ulises Ruiz.

Rudo recibimiento

Salomón Jara tampoco inició su mandato en los mejores términos, pese a que recurrió a las viejas prácticas del PRI, como el acarreo y la pasarela para que se le rindiera pleitesía por parte de políticos y funcionarios en sus tres primeros actos: la toma de posesión en el Congreso de Oaxaca; un encuentro con el "pueblo" en el auditorio Guelaguetza y una calenda triunfal por las principales calles del centro histórico, para saludar desde el balcón del Palacio de Gobierno.

En compañía de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, para Jara todo iba bien hasta que se hizo presente el magisterio de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos integrantes lo abuchearon y le entonaron rechiflas con algunas mentadas.

De hecho, mientras Jara rendía protesta en el Congreso local, integrantes de la Sección 22 realizaron una megamarcha que salió del cruce de Trinidad de Viguera hasta el Zócalo de Oaxaca. Cuando salió al balcón a dar el saludo, el magisterio lo recibió con rechiflas y consignas: "¡Fuera, fuera, fuera!", "Salomón, entiende, el magisterio no se vende"; "Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden", fueron algunos de los gritos con los que el magisterio mostró su músculo.

"Al gobierno que entra queremos decirle que ésta no es una marcha de fiesta, es de protesta -planteó el magisterio-. Hay exigencia y queremos respuestas a todas las demandas sociales y laborales de nuestros pueblos originarios." ●

maltrato a las madres de víctimas de feminicidio.

Del 1 de diciembre de 2016 al 13 de noviembre de 2022, la plataforma de feminicidios de Consorcio-Oaxaca documentó 715 feminicidios: 119 en 2017; 121 en 2018; 130 en 2019; 105 en 2020; 100 en 2021 y 140 en 2022, además de mil 984 mujeres desaparecidas.

En este mismo rubro, el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, en voz de su presidenta Angélica Ayala, resaltó que "la administración de Alejandro Murat quedará en la historia, se recordará como el periodo de mayor violencia para las niñas y las mujeres oaxaqueñas, caracterizado como un estado feminicida", pues lo deja en el quinto lugar a nivel nacional en ese tipo de violencia, traducida en 715 asesinatos durante el sexenio, 492 desde la declaratoria de

alerta por violencia de género, 126 en lo que va del año. El 75% de esos asesinatos se cometieron con armas de fuego, 30% en el hogar y 11% de las víctimas fueron niñas y adolescentes.

Aunado a ello, en su sexenio fueron asesinadas 49 personas defensoras: seis en 2017; nueve en 2018; ocho en 2019; siete en 2020; 14 en 2021 y cinco hasta el 10 de noviembre de 2022.

Otras cinco personas defensoras fueron víctimas de desaparición en el sexenio de Murat: Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida en Nochixtlán; los defensores del bosque desaparecidos de Guerrero Grande, San Sebastián Atatlahuca, Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño, así como la defensora Irma Galindo, desaparecida el 27 de octubre de 2021 en la Ciudad de México. 📌



DERECHOS HUMANOS: PROMESAS INCUMPLIDAS

Este 10 de diciembre cumple 74 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestro país llega a la fecha con incontables desafíos que no han sido aún enfrentados con lógica de Estado; se impone, por tanto, un balance más bien negativo. La imparable crisis de desapariciones, la persistente impunidad y el creciente poder de las Fuerzas Armadas obligan a ello.

Las desapariciones no son sólo una herencia del pasado sino una dolorosa herida del presente. Y no únicamente porque la angustia que genera la ausencia de un ser querido en sus familiares se actualiza momento a momento, sino, sobre todo, porque el fenómeno no se ha erradicado. De acuerdo con las cifras oficiales, se registran más de 100 mil personas desaparecidas en México, de las cuales casi 90 mil lo han sido de 2006 a la fecha, y específicamente alrededor de 30 mil de 2018 al presente, a razón de cerca de 9 mil personas desaparecidas por año este sexenio. Una tendencia que no parece disminuir, sin que se haya adoptado hasta ahora la recomendación formulada precisamente este año por el Comité de la ONU sobre las Desapariciones en el sentido de que se adopte una "política nacional para prevenir y erradicar" este flagelo. En este panorama, aunque hay algunos esfuerzos gubernamentales relevantes de búsqueda e identificación, a menudo aislados y no apoyados por todas las instituciones, las madres buscadoras siguen dejando la vida haciendo lo que el Estado omite: cinco de ellas fueron asesinadas por buscar a sus hijos durante 2022.

En cuanto a la impunidad generalizada, ésta no ha sido revertida. Quienes en México son víctimas de un delito o de una violación a derechos humanos sólo conocen la justicia en dos de cada 100 casos. El cuello de botella se ubica, sobre todo, en las fiscalías. Nuestro problema de impunidad es fundamentalmente un problema de policías y ministerios públicos, no de jueces y juezas pese al insistente y desafortunado discurso oficial. El tránsito de las procuradurías a las fiscalías significó sólo un cambio de nombre, no de prácticas; peor

aún: invocando a conveniencia su autonomía, las fiscalías hoy se abstienen de colaborar con otras áreas de la administración pública, como lo acredita el rezago en la creación del muy necesario banco nacional de datos forenses. Entre tanto, la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción. Volveremos a cerrar el año con más de 30 mil homicidios, de los cuales sólo unos cuantos llegarán a ser resueltos por la justicia. Incluso casos que este año volvieron a sacudir la adormecida conciencia nacional frente a la violencia, como el de los entrañables sacerdotes jesuitas asesinados en la Sierra Tarahumara, Javier Campos y Joaquín Mora, permanecen impunes.

El poder de las Fuerzas Armadas, por su parte, se ha incrementado a niveles hasta hace poco impensables. Más de 10 cambios legales recientes otorgan mayor poder al Ejército sin que a la par se estén diseñando controles civiles externos robustos para la rendición de cuentas y sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación priorice la resolución de los asuntos pendientes que están bajo su análisis respecto de este tema. En este 2022 que acaba se añadieron dos reformas adicionales, de muy hondo calado: la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena y la ampliación hasta 2028 de la intervención de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública. Esto ocurrió pese a que la escandalosa vulneración a la seguridad digital del Ejército, en el episodio de los #GuacamayaLeaks, retrató a una fuerza castrense dispendiosa, encubridora de abusos cometidos contra su propio personal, desconfiada de los organismos internacionales y propensa a vigilar a organismos civiles de derechos humanos y periodistas por considerarlos "grupos de presión", como sucedió respecto del Centro Prodh. Un Ejército, en suma, que no ha introyectado valores básicos de la democracia y que no es impermeable ni a la corrupción ni a la delincuencia organizada.

Lo ocurrido este año en el caso Ayotzinapa muestra nitidamente cómo estos factores pueden articularse para causar retrocesos. Tras ocho años de los hechos, las

conclusiones se precipitaron sin cuidar el pulcro esclarecimiento de lo sucedido. Eso llevó a que se presentaran acusaciones endeble y a que se publicara un informe que se apoyó en elementos carentes de verificación técnica. El escenario fue aprovechado por el Ejército, que presionó para que se cancelaran órdenes de aprehensión obtenidas legalmente, al exhibirse los innegables vínculos de sus elementos con el narcotráfico en Iguala. La fiscalía acató la instrucción castrense y después operó con desaseo legal, como lo ha hecho una y otra vez este sexenio, propiciando la salida del fiscal en quien confiaban las familias. El resultado está a la vista: hoy de ninguna manera puede decirse que la verdad ha sido esclarecida. La promesa de resolver el caso continúa incumplida y la zozobra de los padres y las madres de los muchachos no termina.

En derechos humanos, la enumeración de promesas que han sido incumplidas, como la de esclarecer Ayotzinapa, podría continuar: no se han reducido los feminicidios, no cesan los abusos contra migrantes, se siguen presentando casos de despojo territorial contra comunidades indígenas, todo en medio de la pasividad de una CNDH cada vez más partidizada. Frente a este panorama, lo peor que se puede hacer es negar la realidad. Afirmar que en México ya no se violan los derechos humanos, que ya no hay impunidad, que las desapariciones son sólo herencia del pasado, que las instancias internacionales de derechos humanos fueron cómplices de atrocidades, que no hay militarización porque las Fuerzas Armadas son pueblo o que Ayotzinapa ya se resolvió, no es en absoluto responsable. Esta retórica triunfalista distorsiona la realidad y además genera el nocivo efecto de desmovilizar a una sociedad que venía ya desde hace tiempo demandando —como es su derecho— respuestas urgentes frente a la crisis de violencia imperante, con indignación, pero también con creatividad, empatía, participación y organización.

Para no normalizar la inhumana violencia que se vive en el país y para no perder el sentido de urgencia que hasta hace

¿HAY VIDA DESPUÉS DE LA 4T?

poco compartían amplios sectores frente a la necesidad de poner en el centro las causas de las víctimas, es indispensable no negar la realidad. Cuando los hechos objetivos son relativizados en aras de sostener una posición política o cuando las víctimas son usadas como armas arrojadas en disputas partidistas, los derechos humanos pierden.

Promesas relevantes no han sido cumplidas y la crisis de derechos humanos no ha sido revertida. Aceptar que esto es así no implica, empero, perder toda esperanza. Ésta resiste, como perseveran las madres buscadoras de personas desaparecidas; los familiares de los mineros atrapados en Pasta de Conchos y El Pinabete; o como en una cárcel de Tlaxcala resiste Keren Ordoñez, acusada de un delito que no cometió, aguardando justicia como tantas personas y visibilizando el impacto de la tortura sexual como las mujeres de Atenco. Y es que, ante un panorama oscuro, los esfuerzos de víctimas, periodistas, activistas, organizaciones, colectivos, especialistas, instancias internacionales, movimientos y un número creciente de personas servidoras públicas, van abriendo espacio para la vida entre tanta muerte, desde la fuerza que nutre la memoria. Porque como escribiera David Huerta en su poema sobre Ayotzina: "(...) a pesar de todo / los muertos no se han ido / ni los han hecho desaparecer"; su magia permanece "en el amanecer y en la cuchara / en el pie y en los maizales / en los dibujos y en el río". Desde esa punzante memoria, cargada del peso de ausencias irremediables que son sin embargo presencias cotidianas, los esfuerzos orientados a construir un México donde la dignidad sea costumbre no cesarán pues, como dejó escrito el poeta fallecido este mismo 2022, aún debemos a las víctimas "el pan del cielo / la espiga de las aguas / el esplendor de toda tristeza / la blancura de nuestra condena / el olvido del mundo / y la memoria quebrantada / de todos los vivos". ●

* Del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

La contramarcha del domingo pasado tuvo varios propósitos: restañar el ego presidencial –lastimado por la marcha a favor del INE–, movilizar a una base social aletargada –el presidente teme perder en 2024– y mandar un mensaje de advertencia a quienes piensen revertir el legado de la 4T. Esto último es clave: quien suceda a Andrés Manuel López Obrador, venga de la oposición o de la misma Morena, tendría que pensar dos veces antes de intentarlo. Ahí estaría "el pueblo", presto a manifestarse contra cualquiera que osara contrariar al líder. Si bien no habría tantos manifestantes en la calle sin el aparato del gobierno federal, no faltarían recursos de gobernadores afines para llenar el Zócalo y, en coyuntura extrema, para provocar ingobernabilidad.

Ni siquiera tendría que salir AMLO de su prometido autoexilio en Palenque. Podría ser un miembro de su círculo íntimo quien se hiciera cargo de las medidas correctivas, siempre con la mira en la revocación de mandato. Es decir, un sucesión desafiante, decidida a enmendarle la plana, sólo tendría asegurado medio sexenio. El culto al "humanismo mexicano" –¿peñonismo sin Perón?– podría tener heredero y derecho de veto. Aunque el próximo gobierno lograra abrir la caja fuerte de las Fuerzas Armadas para sacar de ahí el tren o los aeropuertos, aunque consiguiera romper los candados constitucionales y modificar la política social, tendría que enfrentar una potente protesta pública.

En este sentido la movilización del 27 de noviembre sería una admonición dirigida primordialmente a extraños, sí, pero también a propios. Te lo digo Adán para que me entiendas Claudia. La "Transformación" está respaldada por gente, por bastante gente, así que mídanle antes de tocarla. Creo que a los opositores les llegó el recado. Y tengo la impresión de que, a

posteriori, los "hermanos" de AMLO también lo recibieron y quizá trocaron sus sonrisas en muecas de preocupación. Y es que aun si desearan mantener las cosas como están, incluso si no quisieran hacer modificaciones sustanciales al proyecto de nación de su jefe, tendrían que hacer malabares financieros para subsistir. Y esos malabares podrían implicar la supresión de algunos programas o la suspensión de obras inconclusas.

AMLO adecuó el país a su imagen y semejanza, y para cualquier otra persona será muy difícil manejarlo a partir de 2024. No es cuestión de ideologías sino de personalidades. ¿Quién podrá lidiar con un Ejército omnipresente, con una CNTE empoderada en la SEP o con un crimen organizado arraigado y engallado a punta de abrazos? Y en lo internacional, ¿quién levantará el tiradero de un gobierno que en ese terreno no ha dado una? Detengámonos un momento a analizar la relación bilateral con Estados Unidos. Si repiten los demócratas en la Casa Blanca, ¿cómo hará el (la) siguiente presidente de México, sin el escudo del arrastre popular de AMLO, para resarcir la relación con ellos? Fueron tantos los escupitajos a Joe Biden –desde hacerle un acto de campaña a su rival y regatearle la felicitación por su triunfo electoral hasta sabotear la Cumbre de las Américas– que Biden mismo o quien lo sustituya no va a buscar a quien los lanzó sino a quien los pague.

Pero supongamos que se cumple el deseo de AMLO de que gane su inefable amigo Donald Trump. El nuevo inquilino de Palacio Nacional –¿o alguien se atreverá a volver a Los Pinos?– sufrirá para encarar las agresiones del rey del antimexicanismo estadounidense. No tendría ni amistad ni margen de maniobra para hacer más acuerdos inconfesables, toda vez que México ya aceptó hacerle el trabajo sucio de detener migrantes con la Guardia Nacional. Por lo demás, Trump no se tragaría el cuento del *Mexican mad man (woman)* al que no hay que importu- ▶

MARCHA

DE FARSA Y FARSA DE UNA MARCHA

nar porque es capaz de cometer alguna locura, por la sencilla razón de que fue él quien le enseñó a AMLO ese truco. Y si quien llegara al poder del otro lado de la frontera fuera Ron DeSantis o cualquier otro radical de estirpe MAGA el asunto sería peor, porque en tal caso sí entraría en juego la ideología y el choque sería frontal. No se diga si el Congreso estuviera dominado por los republicanos. Entonces AMLO, desde su finca chiapaneca, vería que los demócratas no son tan malos como creía. Y conste que estoy asumiendo –ojalá no sea *wishful thinking*– que las consultas sobre el T-MEC se resolverán sin llegar al panel. Porque si la administración de AMLO sólo está ganando tiempo, que Dios nos agarre confesados...

Pergeño aquí un escenario pesimista, pero en cualquier otro se mantendría la espada de Damocles de la movilización. Si bien es cierto que la Presidencia de la República tiene instrumentos de poder para ir desmantelando poco a poco el cacicazgo de un expresidente –Cárdenas pudo romper el Maximato de Calles– no lo es menos que no será fácil hacerlo con la figura de culto de AMLO. Creo que la marcha sirvió para dejar esa advertencia: habrá vida después de la 4T en la medida en que la dejen prevalecer. O sea: no.

PD: Que el debate nacional no nos impida mirar a los estados. En Chihuahua, tras librar desde la gubernatura una valiente lucha contra la corrupción, Javier Corral está bajo asedio de los intereses que afectó. Ha sido detenido Francisco González, quien fuera su limpio y eficaz fiscal anticorrupción, falsamente acusado de “tortura psicológica”. Atención: si se da marcha atrás a la Operación Justicia para Chihuahua y los corruptos se salen con la suya, el mensaje será la restauración del pacto de impunidad. ●

La magna manifestación de apoyo que el pueblo de México organizó a su líder y presidente fue impactante. Éste no esperaba menos ni nosotros, los mortales comunes y corrientes, más. Hubo de todo. Lo que más me impresionó fue la espontaneidad de quienes intervinieron. Nada de acarreos. Escribo de oídas; no asistí.

Existe la posibilidad de que los participantes, por sí, hayan pagado el transporte público que los trajo de lugares distantes. Desde luego, nada con cargo al erario público. No son priistas. “No somos iguales”.

Hay otra posibilidad: que las largas filas de autobuses foráneos que llenaron y contaminaron la Ciudad de México fueran alquilados por los clasemedieros, disfrazados de sociedad civil, para desprestigiar el auténtico y sincero apoyo que los mexicanos dieron a su líder, humanista, profeta, legislador e ideólogo. Pronto les llegarán auditorías. No estarán exentos de la acción de las fiscalías por el uso indebido de sobres amarillos y por delincuencia organizada. “Entonces será el lloro y el crujir de dientes.” No quisiera estar en su lugar. Son perversos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tan diligente el domingo 13 de noviembre pasado, no decretó una contingencia ambiental. Con sus asesores buscaba la forma de culpar al bueno de Marcelo por la muerte de las dos menores que cayeron en una alcantarilla. Ya encontraron cómo hacerlo. Esa es una posibilidad, la otra, la más creíble, es que haya estado ocupada en escoger el vestido de novia que usará en su próxima boda. Comentan que será guinda. Tiene bien puesto el color de su movimiento.

Por angas o por mangas, doña Claudia, por no haber decretado una contingencia ambiental, incurrió en una omisión grave, por virtud de ella se permitió la libre circulación de los miles de autobuses que los fifis y angloparlantes contrataron para desprestigiar el auténtico apoyo que el pueblo sabio y bueno brindó a su líder.

Los gobernadores de los estados emanados de Morena no faltaron al com-

promiso. Para no sentirse solos, trajeron acompañantes. Seguro que los autobuses en que vinieron también los pagaron los perversos clasemedieros; éstos no desaprovechan oportunidad para mostrar lo que son: conservadores, reaccionarios, saltapatrás, que estudiaron en el extranjero y comen tres veces al día.

No faltaron las muestras de apoyo incondicional y ciego. Las hubo. A los morenistas sólo les faltaron las matracas para sacar el PRI que llevan dentro. Estuvo ausente la momia del eterno líder de los trabajadores: Fidel Velásquez. Él, en sus mejores tiempos, hubiera sido incapaz de organizar una manifestación tan espontánea y comprometida.

Layda Sansores se vio muy rejuvenecida. El teñido rojo de su cabello le ocultaba las canas y la hacía aparecer más sexi. Es falso que esté excedida de peso. El vestido no le ayudaba. Félix Salgado, “gobernador” del estado de Guerrero, estaba sobrio. Cosa rara. Alguien comentó que en el bolsillo trasero de su pantalón le vio una botella “nalguera” para hidratarse. Encabezó uno de los contingentes más numerosos y alegres.

Gerardo Fernández Noroña, una de las corcholatas a disposición de nuestro líder impoluto, portaba un cartel; en él protestaba contra el maltrato que recibe en los aeropuertos del país. Ha sido humillado: “Imagínense ustedes” que él, tenga que esperar su turno y hacer cola como cualquier mortal común y corriente. Éste, para el caso de que alguien le gritara “Changoleón”, llevaba puestos los guantes de boxeador.

No asistieron, tal vez por pudor, las señoras ministras de la Suprema Corte, las que, según se dice, acuerdan con el “preciso” lo relativo a la sucesión en la presidencia de esa dependencia. Por su mediación, la Corte está a punto de convertirse en parte del Poder Ejecutivo. Si asistieron, no llevaban la toga que es propia de su oficio. Por ganas no quedó.

En la manifestación no faltaron quienes pidieran la reelección de nuestro mesías; otros, los más cautos, pidieron que

ERNESTO VILLANUEVA

MEDIOS PÚBLICOS, RETOS

únicamente conserve el cargo mientras viva. Uno de los manifestantes, en una pancarta, exigía que, a través de un artículo transitorio al Código Civil se prolongue la duración del mandato de AMLO únicamente 24 años más, a fin de que consolide su 4T.

No hubo entrega de sobres amarillos. No se vio a Pío recibéndolos. Si hubo entrega, pudo haber sido en secreto. No se vale. Los camarógrafos de Manuel Velasco Coello, ahora senador, se perdieron unas buenas tomas. La falta de sobres amarillos se suplió con la entrega de tortas y refrescos que hizo doña Claudia en persona.

Martí Batres, para cerrar el número de participantes en 25 mil, contabilizó a los profesores de la Ceteg, que se hallan instalados en el campamento permanente que está frente a Palacio Nacional. No se quisieron quitar; se negaron a levantar sus carpas. Dijeron que van a estar acampados hasta que AMLO los reciba. Amenazaron con romper el récord impuesto por él en 2006. "Voto por voto, casilla por casilla" es su grito. Peor para ellos. Éstos, con su presencia, evitaron que el Zócalo se viera vacío.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reclamó a Salomón Jara, gobernador electo de Oaxaca, y a su antecesor en el cargo, Alejandro Murat, lo reducido de su contingente: "Traíamos mucha indiada; como nos dimos una vuelta al outlet Felipe Ángeles, prefirieron quedarse a vender tlayudas. De ahí acá, por la vía rápida, hicimos sólo cinco horas. Terminando los pasaremos a recoger."

Cauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, solo, con una camiseta del América, no tenía idea del objeto de la manifestación. Le echaba porras a la selección nacional. Portaba un letrero que decía: "Cárcel para Uriel Carmona". Américo Villarreal, de Tamaulipas, en otra cartulina, pedía el "desafuero" de su antecesor. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, en silla de ruedas, a gritos, exigía ser él quien designe a su sucesor. Rocío Nahle abandonó a sus paisanos zacatecanos; cargando una gran tambora se unió a los veracruzanos. ●

La cobertura de la marcha a favor de la 4T dejó entrever las enormes limitaciones normativas e institucionales que tiene frente a sí la red de medios de comunicación que viven con cargo al erario, habida cuenta que los criterios periodísticos universales de brindar información imparcial y, por ende, garantizar el derecho a la información cedieron ante intereses ajenos a estos valores. Veamos.

Primero. Sorprendente fue el entremetimiento entre información, opinión y propaganda dentro de lo que, se supone, era una cobertura informativa de la marcha de la Ciudad de México por los canales 11, 14 y 22, IMER, Radio Educación y Capital 21 en donde, ya en el desvanecimiento del ejercicio periodístico, hasta un reportero se refería a los entrevistados durante el evento como "compañeros", dejando fuera la mínima distancia entre quien entrevista y el entrevistado, además de los juicios de valor exaltando las proclamas de la 4T y del apoyo al presidente de la República. Y los análisis invitados fueron una sola voz en coro sin ninguna opinión distinta a la narrativa oficial. Ni duda cabe que los reporteros y conductores tienen derecho a tener su propia postura política, pero es inadmisibles que bajo ese tamiz lleven a cabo su labor informativa, ya se trate de un medio privado o de naturaleza pública.

En México el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dispone las obligaciones de los medios concesionados frente a sus audiencias que pasan por el pluralismo. Así también el artículo 8 del Código Europeo de Deontología Periodística establece que: "La información constituye un derecho fundamental reconocido como tal por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las constituciones democráticas, cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de exigir que la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en

las opiniones sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados". Y ese principio se encuentra prácticamente en todas las leyes y códigos de ética del periodismo en las sociedades democráticas. Y es así porque los medios hacen una labor de polea de transmisión entre los hechos de interés público y la sociedad que forma opinión y toma decisiones en razón y medida de la información que recibe, de ahí la importancia de que la veracidad juegue un papel de importancia capital.

Segundo. Si los principios generales de veracidad, imparcialidad informativa y pluralidad de opiniones y análisis han adquirido carta de naturalización en los medios de comunicación concesionados en el mundo, con mayor razón esos rasgos distintivos son especialmente previstos en los medios públicos, toda vez que esas figuras mediáticas viven con recursos de la sociedad. Sería un despropósito que la comunidad pagara para ser desinformada o informada de manera parcial. Es por ello que las leyes que dan vida a estos medios imponen medidas para optimizar el derecho a saber. Incluso en México. Así, por ejemplo, el artículo 7, fracción II de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano establece como uno de sus principios rectores "el compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social y cultural del país". Formalmente, además, ha habido avances en estos años al crearse consejos consultivos, defensorías de la audiencia y códigos de ética en cada uno de esos medios. Estos contrapesos institucionales y mecanismos de participación ciudadana no han sido, empero, suficientes para generar una razonable identidad entre el deber ser de la ley y el ser de los hechos, como se puso de relieve en la marcha del pasado domingo 27 de noviembre. Ni duda cabe que en el pasado los denominados medios públicos eran difusores de contenidos esencialmente favorables al gobierno en turno, pero no se había visto una narrativa única como la observada en la marcha de referencia. ▶

Tercero. Esta singular cobertura informativa debe verse como una oportunidad para reflexionar sobre el papel de los medios públicos en el contagio de las prácticas democráticas. No hay un modelo unívoco sobre la naturaleza jurídica que debe regular el funcionamiento de estos medios, pero sí existen algunos puntos que podrían ser aplicables a México y otros que resultan contraproducentes. En este último caso, los medios públicos de Suecia tienen una gestión gubernamental y funcionan con gran independencia editorial. Esto sucede en ese país por la apropiación histórica de una sociedad exigente y con una alta tasa de alfabetización mediática y digital que no se observa en México. Las asimetrías entre estos dos países son enormes. Así, por ejemplo, mientras el 2 de diciembre de 1766 Suecia era el país pionero en tener una ley de acceso a la información pública, México todavía no existía como tal y era una colonia española. Por lo anterior, en el país debe ponderarse la idoneidad de una reforma de largo aliento que incluya, al menos: a) Un marco regulatorio único para todos los medios públicos (al menos los federales) que incluya órganos colegiados de dirección donde la presencia del gobierno sea minoritaria. Ahí están como ejemplos los casos de Alemania y de Italia, por citar dos paradigmáticos; b) Inclusión de materias de asignatura en la educación primaria, secundaria, preparatoria y escuelas normales de alfabetización mediática. La sociedad mexicana no está en condiciones de exigir medios de calidad pagados con sus impuestos si no hay siquiera conciencia de qué significa esa expresión; c) Crear observatorios y veedurías de medios independientes por ley para coadyuvar a la educación mediática; d) Establecer sanciones para el incumplimiento de los códigos de ética que ahora son meramente referenciales en el mejor de los casos. De no tomarse medidas de gran calado, los medios públicos seguirán siendo, en mayor o menor medida, espacios de difusión sin que cumplan la razón de su existencia: el derecho a la información veraz, completa e imparcial. ●

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

EDUARDO VERÁSTEGUI, PUNTA DE LANZA DE LA ULTRADERECHA EN MÉXICO

El cónclave de la ultraderecha internacional realizado en México los pasados 18 y 19 de noviembre fue organizado por la Conferencia Política de Acción Conservadora. Ahí se anunció que tienen planes de crear un partido de "derecha verdadera en México", pues Acción Nacional, dijeron, no representa la agenda de un verdadero partido conservador. El PAN es vergonzante de una gran tendencia en la cultura política en el mundo. Eduardo Verástegui, organizador del evento, calificó al PAN como "derechita cobarde" y "acomplejada" para combatir "el aborto, el matrimonio homosexual y el comunismo". Trató de provocar a los blanquiazules al ostentar que hoy en el mundo, ser de ultraderecha es un buen negocio político. Ahí están Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni; el Fidesz-Unión Cívica Húngara, de Viktor Orbán; Santiago Abascal con Vox, en España; el Frente Nacional, de Marine Le Pen, en Francia; el Partido Social Liberal de Jair Bolsonaro, de Brasil, y desde luego Donald Trump, en Estados Unidos.

Eduardo Verástegui fue ampliamente adulado en el foro por el expresidente Trump y proclamado próximo presidente de México por el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del actual presidente Jair Messias Bolsonaro. Verástegui, excantante, actor y modelo, es un apóstol del "bien común", encarna los valores ProVida y es firme su militancia contra la llamada "ideología de género". Presume ser un hombre de valores cristianos y ascéticos, dice llevar una castidad radical al no haber tenido relaciones sexuales en los últimos 17 años. Verástegui junto con otros actores, como Toño Berumen, representan una nueva generación de la ultraderecha en México. Dejan atrás los amargos rostros de los Serrano Limón, los Abascal Carranza, Guillermo Velasco Arzac y Bernardo Ardavín.

Eduardo Verástegui es un férreo opositor a la 4T y a AMLO. Durante el evento, acusó al presidente de debilitar la democracia mexicana y de permitir el avance "sistemático del socialismo global" en México, además de ser la cabeza de un gobierno que busca, presun-

tamente, limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Pareciera que la ultraderecha internacional deposita en Eduardo Verástegui la tarea de organizar a las derechas mexicanas y articular el objetivo de crear un nuevo partido en 2025, como marca la ley. ¿Si los evangélicos tuvieron dos intentos fallidos, por qué no la derecha católica? El objetivo es, al parecer, sencillo de explicar: la conquista del poder. Y el modelo para implantarla en nuestro país es el partido ultraconservador Vox, que tuvo un desarrollo y crecimiento vertiginoso en España.

El término "extrema derecha", que tiene una connotación peyorativa, se refiere a movimientos reaccionarios que se consideran la verdadera derecha o la auténtica derecha y cuyos valores son el tradicionalismo, el nacionalismo, el autoritarismo, incluso el fascismo. Se oponen a la libertad y a la igualdad, y muestran desconfianza incluso violencia hacia los extranjeros (xenofobia).

Según Michel Winock, historiador francés, estudioso de la ultraderecha internacional, ésta tiene nueve características básicas:

1. El odio al presente, considerado un período de decadencia.
 2. Nostalgia por una época dorada en el pasado.
 3. El elogio de la inmovilidad, consecuencia del rechazo al cambio.
 4. El antiindividualismo, consecuencia de las libertades individuales y del sufragio universal.
 5. La apología de las sociedades de élites; consideran como decadencia la ausencia de élites.
 6. Nostalgia por lo sagrado, ya sea religioso o moral.
 7. El miedo a la mezcla genética y al colapso demográfico: supremacismo.
 8. Censura de la moral, en particular a la libertad sexual y a la homosexualidad.
 9. Antiintelectualismo, intelectuales que no tienen contacto con el mundo real.
- Amnistía Internacional advierte que el

término "extrema derecha" es muy ambiguo, pues bajo ese calificativo suele encuadrarse a un gran número de movimientos, corrientes y partidos que tienen relativamente poco en común y que suelen ser, además, antinómicos, adversarios, incluso enemigos. Este término se utiliza, de hecho, para dos tipos de movimientos: primero, los calificados de "reaccionarios", según la definición de la sociología de izquierda del término, presuntos partidarios de un retorno a un supuesto *ancien régime*; segundo, un conjunto de grupos identitarios, verdaderamente extremistas y potencialmente violentos.

Así, las distintas corrientes de filosofía política que han sido definidas como inherentes a la ultraderecha se refieren bien al nacionalismo, al populismo, al monarquismo, al supremacismo, al fascismo, o apuntalado muchas veces por sectores conservadores de las Iglesias y de las religiones.

El cónclave de la ultraderecha internacional en México reconoció que México es un país clave en el hemisferio. Depositaron en Verástegui la tarea de formar una verdadera alternativa de derecha. Vox creció gracias a la acción de dos organizaciones ciudadanas, CitizenGo y Hazte Oír, aliada al Yunque en más de 50 países, como parte de un operativo conspirativo internacional que *desta-pó Wikileaks* hace un año.

Las bases social y operativa de Eduar-do Verástegui para formar un nuevo partido de ultraderecha en México están en El Yunque, organización semisecreta y complotista que tiene decenas de organizaciones de la sociedad civil, como YoInfluyo, los Tecos y los Legionarios de Cristo. Como Vox en España, pretende arrebatar importantes sectores ultracconservadores anidados en el Partido Acción Nacional. Vox sangró de manera significativa al Partido Popular, de José María Aznar.

A principio de la década de los ochenta, no recuerdo bien, la revista *Nexos* publicó un número especial sobre la derecha en México. No recuerdo con exactitud el título: "Al fondo a la derecha" o "Viaje al centro de la derecha". Se preguntaba, entonces, por qué nadie se decía de derecha en este país, ni los panistas, y hasta era un insulto político declararse de derecha. La respuesta que se daba era el efecto político y cultural de la Revolución Mexicana y de la estricta laicidad. Una derecha derrotada en la historia: los conservadores en el siglo XIX y los cristeros en el XX. Ahora todos los caminos nos llevan al Yunque. En 2022 estamos en la antesala de que la ultraderecha política y religiosa salga del clóset. Y es una ultraderecha revanchista. ●

MÉXICO Y EL ESPEJO DE LA CRISIS VENEZOLANA

La migración internacional de personas, realizada en condiciones irregulares, configura uno de los cuadros más crudos de la experiencia humana. Si quisiera describirse un ejemplo de aguda vulnerabilidad de una persona, sería justamente en condiciones de migración y refugio, pues se huye de un origen que expulsa, de un Estado que no protege o que incluso agrede, o bien se escapa de condiciones económicas, sociales y políticas que hacen inviable la vida en el lugar de origen. Se suma a lo anterior la complejidad de la movilidad internacional, no solamente por la carencia de recursos económicos —que regularmente es el caso—, sino por las condiciones jurídicas y de seguridad que enfrenta la migración en los espacios de tránsito y destino, que se añaden como factores de riesgo que pueden conducir a situaciones extremas, incluyendo la muerte.

Desde esta perspectiva, la emigración y la búsqueda de refugio son indicadores de muy serias crisis en los países de origen, que pueden ser de diferente naturaleza. A pesar de su diversidad, el resultado es similar al forzar la salida de personas de sus lugares de vida. Recientemente, después de la crisis internacional de salud provocada por el covid-19 y sus consecuencias sobre crecimiento, empleo, ingreso y además en el acceso a bienes públicos, muchos países vieron repuntar el número de personas migrando hacia otros destinos. Entre los que incrementaron su emigración se encuentran, por supuesto, México y otros países lati-

noamericanos, además de distintas naciones de África y Asia.

Seguramente en muchos lugares del mundo la crisis de salud se añadió a crisis preexistentes, como las económicas, políticas o ambientales. No por casualidad el año 2020 se caracterizó por un repunte sincrónico de los flujos internacionales de migrantes y refugiados. El mundo entero fue sacudido de manera severa y, entre sus consecuencias, cientos de miles de personas fueron obligadas a abandonar sus espacios de vida, buscando alternativas económicas o la protección internacional.

En el Continente Americano, la frontera entre Colombia y Panamá destaca como uno de los principales espacios de flujos migrantes y de refugio procedentes de América del Sur e incluso de otros continentes. Pero al mismo tiempo es una de las regiones con los mayores riesgos para la vida de las personas que por ahí cruzan. La muerte no es un evento desconocido, lamentablemente. Ante horizontes con agotadas alternativas, los peligros son asumidos con notable valor y decisión.

La selva del Darién, en territorio panameño, históricamente ha sido una barrera natural casi impenetrable. Debe ser muy grande la desesperanza para intentar avanzar por esa ruta con el propósito de llegar al norte, hacia México y después a Estados Unidos. Por lo mismo, el Darién es una especie de observatorio de la desesperanza y de la gravedad de las crisis en los países de origen.

El gobierno de Panamá mantiene un registro sobre el número de personas que cruzan por esa selva (<https://www.migracion.gob.pa/>). Durante 2022, hasta el mes ▶